

EMPRESA



Alberto Barranco Última y nos vamos

Con una emisión de Bonos Samurái por mil 250 millones de dólares a amortizarse a plazos de tres, cinco, 10 y 20 años, el gobierno le dijo adiós la semana pasada al endeudamiento externo... por este año, con la promesa al calce, sin embargo, de estrechar la rendija para el próximo

El problema es que la baja de cortina llega tarde. Aunque la Secretaría de Hacienda minimiza la burbuja, lo cierto es que el país ya rebasó con mucho el límite prudencial fijado por organismos internacionales.

De acuerdo al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el déficit no debe ser mayor al equivalente a 42% del Producto Interno Bruto... y estamos en 48.6.

De hecho, la calificadora de deuda Fitch acaba de externar su preocupación sobre dos cargas de lastre: la tendencia creciente de la deuda pública y la corrupción.

De acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en los años del regreso del PRI a Los Pinos el salto en materia de deuda pública ha sido del equivalente a 9.4 puntos del PIB, de los cuales 4.5 se generaron solo en 2015.

El gobierno ha justificado el crecimiento espectacular señalando que el país mantiene un bajo riesgo de interés y que el saldo acumulado es estable.

La píldora tranquilizante se apuntala en la buena acogida a la emisión de Bonos Samurai, cuya demanda alcanzó 1.3 veces el monto emitido, pese a que las tasas de interés alcanzan solo 0.40, 0.70, 1.09 y 2.4%, de acuerdo con los plazos de redención.

Más aún, la tasa de té de tila habla de que el país cuenta con recursos contingentes por 255 mil millones de dólares, de los cuales 177 corresponden a reservas del Banco de México y 88 al préstamo en lista de espera del Fondo Monetario Internacional.

Según ello, el monto representa el equivalente a 13 veces el pago del servicio de la deuda externa, y 33 el de la interna.

El problema es que sin reservas se iría a las nubes la paridad peso-dólar y se derrumbaría la calidad crediticia del país, encareciéndose los intereses... justo cuando empezaran a correr los pagos al FMI.

Lo grave del caso es que de acuerdo al CEESP el gobierno no cumplió el año pasado con el ajuste presupuestal de 124 mil millones de pesos, con la novedad de que al final se registró un sobregasto de 142 mil millones.

De hecho, el organismo aconseja que para el 2017 el gobierno logre un superávit presupuestal primario por el equivalente al 1.5% del

PIB, frente al 0.2 que se había planteado, lo que exigiría una reducción del gasto de 300 mil millones de pesos.

Olvídense de los tiempos políticos, reclama el organismo.

Se diría, pues, que el formidable boquete financiero provocado por la caída del precio del petróleo no ha empatado con la reducción drástica del gasto corriente, equilibrándose con deuda.

El gobierno, pues, replica el fenómeno ICA.

De acuerdo a lo previsto por la Constitución, la deuda pública debe servir para apuntalar el crecimiento del país, con la novedad de que gran parte se destina a gasto corriente o pago de intereses.

Y aunque el gobierno lanzó las campanas a repique al anunciar que el monto total de deuda pública descendió en 121 mil 647 millones de pesos, es decir 1.4% en términos reales, para ubicarse en 8.57 billones de pesos, la merma no tiene nada que ver con apretarse el cinturón.

Estamos hablando del remanente de operación del Banco de México por 239 mil millones de pesos entregado a la Tesorería, que de acuerdo con la ley debe

destinarse a reducir la deuda. A su llegada a Los Pinos el presidente Enrique Peña Nieto cargaba con una deuda pública de 5 billones 350 mil millones de pesos, equivalente a 37%.

El salto, pues, alcanza más de tres billones, equiparables a la recaudación fiscal de un año. ¿Dónde quedó la bolita?